

Límites implícitos a la participación ciudadana.

Tras la oleada referendaria de la primera década del Siglo XXI, los Estados latinoamericanos comprendieron los riesgos de someter al arbitrio del pueblo todas las decisiones trascendentales, sobre todo teniendo en consideración los términos maniqueos en que suelen plantearse los referenda, que no son otra cosa que juegos de suma cero. Por ello, sobre todo en el último lustro, hemos visto como los Estados han ido colocando más obstáculos a la posibilidad del pueblo de legislar sobre determinados aspectos trascendentales para la vida democrática.

Una multiplicidad de Tribunales Constitucionales han dejado claro que el pueblo no lo puede todo y que, sin duda, la capacidad que este tiene de aprobar normas por la vía referendaria está condicionada por el propio ordenamiento interno y por las obligaciones que el Estado ha asumido en el Derecho Internacional de los Derechos Humanos. Dos ejemplos de esa restricción a la participación ciudadana lo constituyen el caso de la reforma constitucional para permitir una tercera reelección en Colombia, bloqueada por la Corte Constitucional de ese país en la sentencia C-141-2010, y el caso de la iniciativa para someter en Costa Rica a referéndum un proyecto para regular las uniones civiles entre personas del mismo sexo.

En todos los casos anteriores, a pesar de que no existía norma expresa que vedara la participación del pueblo en la decisión de esos asuntos, los Tribunales Constitucionales entendieron que el sistema democrático requiere ser preservado, a través de límites implícitos, del legislador referendario.

El caso que se pretende exponer en este breve trabajo es la sentencia 2010-13313 de la Sala Constitucional de Costa Rica (uniones de hecho entre personas del mismo sexo), la cual bloqueó la posibilidad de que las personas se pronunciaran en la vía referendaria sobre un tema de relevancia nacional, pues se estimó por parte de ese Tribunal que el pueblo no puede decidir en las urnas respecto de los derechos de una minoría, de manera tal que consideró que esas cuestiones solo pueden ser resueltas por el parlamento.

En el medio de esas decisiones, sobre todo en el caso costarricense, han surgido tensiones entre los Tribunales Electoral y Constitucional en torno a la

competencia para interpretar los límites a la participación del pueblo en la legislación por vía referendaria, cuestiones que se pretende abordar en esta breve investigación para intentar dibujar una frontera entre el ejercicio de la justicia electoral y la constitucional.

La investigación, no obstante, no debate la existencia de los límites implícitos antes reseñados, sino que se limita a explicar su sustento y aclarar las razones por las cuales podría ser deseable vedar la participación ciudadana en la decisión de determinados asuntos de relevancia para el Estado.